

REBELIÓN MILITAR Y REPRESIÓN FRANQUISTA EN GALICIA*

Coup d'Etat and Francoist Repression in Galicia

Julio PRADA RODRÍGUEZ

jprada@edu.xunta.es

Universidad de Vigo

BIBLID [0213-2087(2006)24;153-177]

Fecha de aceptación definitiva: septiembre 2006

RESUMEN: En este artículo se estudia, en primer lugar, la movilización socio-política que precede al golpe de estado en Galicia para continuar con el análisis del proceso de gestación de la sublevación de julio de 1936, sus antecedentes y la toma del poder por los militares y sus apoyos sociales y políticos. También se profundiza en las diferentes modalidades de la represión física con resultado de muerte, en la caracterización de las víctimas, en las distintas fases y en sus objetivos finales: paralizar la resistencia, garantizar una gigantesca movilización de recursos hacia los frentes bélicos y asegurar la imposición de un nuevo orden político y social mediante la eliminación física de todo aquel que representase un peligro para su consolidación. Finalmente, se realiza una aproximación al número de asesinados en el conjunto de Galicia.

Palabras clave: Galicia, octubre de 1934, golpe de estado, guerra civil, represión franquista.

* Este artículo se realizó en el marco del Proyecto de Investigación *Sociedad, Ideología y Poder Político en la Galicia contemporánea*, Ministerio de Ciencia y Tecnología (2003-2006), Ref. BHA2003-07243 del que es director el profesor Jesús de Juana.

ABSTRACT: In this article one studies, in the first place, the social and political mobilization that precedes to the coup d'état in Galicia. Next, one analyzes the process of gestation of the military revolt, its antecedents and the taking of the power by the social and political insurrections and their supports. Also it is deepened in the different modalities from the physical repression, in the characterization of the victims, the different phases and their final missions: to paralyze the resistance, to guarantee an enormous mobilization of resources it war and to assure the imposition a new political and social order; for it the physical elimination of all that was necessary that represented a danger for its consolidation. Finally, it is made a assassinated approach to the number of in the set of Galicia.

Keywords: Galicia, October of 1934, coup d'état, civil war, repression.

INTRODUCCIÓN

Dos años después de iniciada la guerra civil, un sacerdote, M. Silva Ferreiro, publicaba un libro destinado a ensalzar la contribución de Galicia a la sublevación de julio de 1936 en el que podían leerse frases como las que siguen:

Convencidos como estamos de que el triunfo del Movimiento Nacional es más bien obra de Dios que de los hombres, no vamos a decir nosotros que sin la adhesión de Galicia hubiera fracasado el Movimiento en España [...]. Decimos sí que, humanamente pensando, no vemos nosotros como sin Galicia hubiera podido la España Nacional resistir y contener la formidable avalancha roja de casi todo el norte de España [...]. Decimos igualmente, que sin la adhesión de Galicia, el patriótico y Salvador Movimiento se vería privado de la más importante fuente de aprovisionamiento en hombres, municiones de boca y... ¡quién sabe si en material bélico también!¹.

Los miles de gallegos que habían sido asesinados y las decenas de miles que fueron internados en prisiones y campos antes de que esta obra viera la luz no se conciliaban, sin embargo, con esa imagen de un país rendido sin fisuras a la causa nacional. Su sangre y su privación de libertad eran mucho más elocuentes que toda la prosa destilada en las casi quinientas páginas, llenas de retórica anti-republicana y antimasonica, escritas por este pastor: Galicia no era retaguardia segura; no era la «Navarra» del Noroeste que muchos, unos por miedo y otros en procura de recompensas y promociones, estaban interesados en presentar. Toda esa ingente movilización de recursos a la que aludía Silva Ferreiro no hubiera sido posible, es cierto, sin la colaboración activa e entusiasta de una parte de la población. Pero tampoco sin las lealtades compulsivas y el compromiso apócrifo producto de una salvaje represión que cercenó de raíz las bases sociales de apoyo a la República; las mismas que habían pugnado por abrirla a las corrientes

1. SILVA FERREIRO, M.: *Galicia y el Movimiento Nacional. Páginas Históricas*. Santiago de Compostela: Imprenta y Enc. del Seminario Conciliar, 1938, p. 19.

más innovadoras, a la democracia, al reformismo, a la participación de las masas, a la implicación en los grandes debates de la política nacional, al abandono de la resignación, a la lucha por adquirir la capacidad de decidir sobre su propio futuro.

Entre abril de 1931 y julio de 1936 estas dos Galicias rivalizaron pacíficamente por sacar adelante sus particulares proyectos de sociedad y de país. Como en toda disputa, no faltaron las tensiones, las luchas enconadas, incluso las fracturas; y tampoco puede ocultarse que, a medida que se avanza hacia esta última fecha, los puentes de entendimiento cada vez eran más escasos, pero no inexistentes. El tercer *Ateneo* ourensano, inaugurado en marzo de 1936, reunió, en sus escasos meses de vida, a unos 300 socios entre los cuales figuraba lo más granado de la intelectualidad y la erudición del momento, sin distinción de ideologías ni de matices: nacionalistas, comunistas, socialistas, republicanos de izquierda, cedistas, calvosotelistas, tradicionalistas, falangistas y hasta militares golpistas vinculados a la Unión Militar Española (UME). Poco más de cinco años después de la fiesta republicana del 14 de abril de 1931, compañeros de tertulia y de café, miembros de idénticas comisiones organizadoras, afiliados a análogas sociedades recreativas y culturales se fueron distanciando y sus debates haciéndose más agrios; pero, a pesar de un intento de insurrección revolucionaria fallido, de varios golpes de estado frustrados y de una «primavera trágica», todavía podían sentarse a la misma mesa y laborar juntos en pro de la cultura de su tierra.

Bastó una semana de guerra civil para que muchos no conocieran ya al amigo ni al camarada; para que otros tantos se implicasen en la delación del antiguo correligionario y, ya no digamos, del rival más encarnizado; para que alguno se atreviese a empuñar la pistola asesina o a usar su poder o su influencia para castigar a aquél con quien compartiera el mismo círculo y las mismas aficiones; para que más de uno de esos socios cayese ejecutado de un tiro en la nuca en cumplimiento de órdenes directas emanadas de otro afiliado. Siete días, quizá menos, fueron suficientes para que una de esas dos Galicias se aplicase con denuedo a la exterminación de la otra; para que comenzase el trabajo que borraría de su geografía cualquier rastro de ella, incluida su memoria.

Y en verdad habría que concluir que la tarea se realizó con notable éxito; tanto que hasta en las historias generales de la guerra civil, escritas por reputados especialistas, la mayoría de las páginas que se dedican a Galicia reproducen, en esencia, ese cuadro retratado por Silva Ferreiro: lógica —ya no mesiánica, pero casi determinista— inclinación por el bando sublevado y desmedido entusiasmo colaborador. Quizá por no haber reparado, como cierto panegirista, que esas dos Galicias lo habían dado todo por España: la una, el traidor, Portela, y el asesino, Casares Quiroga; la otra, el protomártir, Calvo Sotelo, y el salvador, Franco. Por no haber advertido, como el entonces obispo de Ourense Florencio Cerviño González, «que tan alta dicha [...] no pueda lograrse sino con sangre de mártires»² y sea preciso engendrar el mismo virus que después sirve para elaborar la

2. *Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Orense (BOEOO)*, 1-III-1937, pp. 61 y ss.

vacuna; luego otros ya se encargarán de borrar todo rastro del primero, como aquel gobernador civil de A Coruña que, en octubre de 1937, pretendió que se suprimiese del Registro Civil el nombre del antiguo líder de la ORGA.

Analizar la realidad o la ficción de esta imagen, el camino, los porqués y los mecanismos de implementación de esta tarea constituyen los objetivos principales de este artículo.

1. ENTRE DOS INSURRECCIONES: OCTUBRE DE 1934-JULIO DE 1936

Remitirse a los acontecimientos revolucionarios de octubre de 1934 como una de las claves de la posterior represión franquista supone, al menos, dos riesgos evidentes. El primero, que con ello pareciera dárseles argumentos a quienes, por ignorancia o interés, sostienen —lo llevan haciendo desde el mismo verano de 1936— que con ellos se produce una fractura social que conduce irremediablemente a la guerra civil, cuando no que esta última comienza en dicha fecha aunque no fuese declarada oficialmente. El segundo, que, aunque no fuese así, los que alientan y apoyan la sublevación estaban cargados de razón para anticiparse a una nueva intentona revolucionaria que una parte de la izquierda marxista no se cansaba de proclamar —también desde hacía tiempo— como inminente. No hacerlo, en cambio, implicaría desconocer la existencia de una serie de elementos que conviene tener presente.

Uno es la reacción ante aquéllos de las fuerzas del orden y de los partidos políticos y los sectores sociales que veintiún meses más tarde se sumarán al golpe. Las primeras, en esta ocasión, obedeciendo fielmente las instrucciones del Gobierno, declarando el estado de guerra, ordenando en cada provincia la concentración de efectivos de la Guardia Civil en lugares estratégicos para evitar que fuesen asaltados sus cuarteles, anulando los permisos de oficiales y soldados, militarizando guardias y agentes municipales y ordenando la formación de patrullas cívicas que colaborasen con la primera en la vigilancia y el mantenimiento del orden; una vez garantizado éste en su jurisdicción, acudiendo allí donde fueron reclamadas para conjurar todo brote revolucionario. Los segundos, resignando en el Ejército el sometimiento de los insurrectos, aplaudiendo su acción heroica y, como en el caso de Falange o los Tradicionalistas, poniendo sus «milicias» a disposición de las autoridades por si su concurso fuera necesario; a diferencia de luego, esta vez no fueron requeridas en ningún lugar de Galicia, aunque no pocos de sus afiliados formarían parte, junto con otros de filiación muy diversa y otros sin militancia conocida, de esas guardias cívicas que proliferaron en diversas villas.

Otro de esos elementos es el modelo represivo ensayado. La actuación de las tropas de la Legión en el Principado ha sido comparada frecuentemente, por su brutalidad, con la que en el verano de 1936 emplearon las columnas rebeldes en su avance hacia Madrid. Pero todavía más significativo nos parece la práctica de miles de detenciones preventivas, el masivo recurso a la jurisdicción de guerra

para la exigencia de responsabilidades reales y presuntas, la clausura de sociedades y centros obreros y campesinos que no habían tenido participación alguna en los sucesos, la destitución de alcaldes y concejales de significación izquierdista aprovechando cualquier pretexto, relacionado o no con el movimiento, la imposición de multas por la autoridad militar y la parcial identidad de actores que se da entre ambas fechas³. No menos reveladora es la actitud de numerosos patronos que aprovecharon la ocasión para despedir a los trabajadores que más se habían distinguido por su compromiso político o societario, para recurrir las bases de trabajo vigentes o para estimular la creación de sindicatos bajo su control.

El tercero, hace referencia a la radicalización de una parte de esa derecha sociológica. Lo ocurrido en Barcelona o en Asturias, pero también otras ciudades y villas de las cuatro provincias gallegas, particularmente en Ferrol, convenció a muchos de la necesidad de apostar por la creación de grupos dispuestos a frenar en las calles a los sectores obreros. Los excesos revolucionarios, de los que se acusó en bloque a toda la izquierda, fuese burguesa o marxista, fueron, al igual que la violencia de la «primavera trágica» a la que enseguida aludiremos, convenientemente amplificadas como parte de un plan para justificar la necesidad de vengar las atrocidades cometidas⁴.

Y el más fehaciente de todos esos elementos: la participación del Ejército en el restablecimiento del orden pone nuevamente en cuestión los esfuerzos para alejarlo de la política realizados durante el primer bienio y abre las puertas a una nueva intervención, reclamado esta vez por una derecha cada vez más convencida de que el mantenimiento de sus privilegios depende más de los militares que de los resultados de una consulta electoral. La prensa gallega, y no precisamente la más reaccionaria, no eludía el debate cuando, en un editorial con el significativo título de «Fortificación del Estado», apuntaba a la necesidad de fortalecerlo subrayando que

El esfuerzo enorme y abnegado [...] que está realizando el Ejército no siempre sería posible exigírselo, con análogo éxito, cuando trances de tamaña magnitud volvieran a darse. Fue ahora el Ejército, con su patriótico y disciplinado proceder, el más firme sostén del régimen. También del orden y de las vidas y haciendas [...]⁵.

3. En Ourense, la única de las provincias gallegas para las que contamos con un estudio comparativo, resulta que, significativamente, al menos un 34,12% de los represaliados en octubre de 1934 lo fueron también a partir de julio de 1936 (vid. PRADA RODRÍGUEZ, J.: *De la agitación republicana a la represión franquista. Ourense 1934-1939*. Barcelona: Ariel, 2006, p. 70). Para la represión sobre el societarismo obrero y campesino en el caso de Lugo vid. SOUTO BLANCO, M^a. J.: *La represión franquista en la provincia de Lugo (1936-1940)*. Tesis de doctorado: Universidad de Santiago de Compostela, 1997, pp. 172-175, que contabiliza hasta 108 sociedades clausuradas repartidas en 37 municipios —el 43,3% agrarias y socialistas, el 29,2% sindicatos obreros, la mayoría ugetistas, y el 27,5% comités de partidos políticos, sobre todo del PSOE.

4. BRENNAN, G.: *El laberinto español*. París: Ruedo Ibérico, 1962, p. 217.

5. *La Voz de Galicia*, 18-X-1934, p. 1.

Es verdad que en los acontecimientos de octubre están presentes muchas de las líneas de tirantez y conflicto futuras y que parte de sus protagonistas militan ya en bandos irreconciliables. Pero eso no significa que con ellos se hubiese iniciado un camino de no retorno hacia el enfrentamiento civil o que el Estado quedase inerme ante otra supuesta intentona revolucionaria. La relativa calma con la que se vive, también en Galicia, el último año de gobierno radical-cedista no hacía presagiar nada parecido a una debacle en cuanto a polarización social se refiere.

Tampoco el ambiente en que se desarrollaron los comicios de febrero de 1936, bien es verdad que no exento de la lógica tensión, por lo demás común a tantos otros Estados en aquella agitada época, anticipaba cataclismo alguno. Sus resultados, si algo evidenciaron, fue, como apuntábamos al principio, la existencia de «varias Galicias». La urbana y la costera se inclinaron mayoritariamente por las candidaturas del Frente Popular; la rural y la interior lo hicieron por el Frente Antirrevolucionario o por el conglomerado que confluyó en el Centro Portelista. Las redes clientelares demostraron que todavía conservaban no poca influencia a la hora de «orientar» el voto de parroquias, municipios y aún comarcas enteras, ya fuese en favor de la izquierda o de la derecha⁶. La discusión del acta que obtuvo Calvo Sotelo por la provincia de Ourense y el fraude que los «amigos políticos» de Casares Quiroga llevaron a cabo en la circunscripción coruñesa situaron a Galicia en un destacado plano de la actualidad durante unas semanas.

Mientras en las Cortes se debatía sobre la una y el otro, los acontecimientos se sucedían con inusitada rapidez. La primera consecuencia del cambio de Gobierno fue la reposición gubernativa de los ayuntamientos electos en 1931 o la formación de otros más acordes con la nueva mayoría de izquierdas. Aunque en el conjunto de Galicia la gran mayoría de las alcaldías fue a parar a hombres pertenecientes a Izquierda Republicana (IR), la práctica totalidad de ellos de extracción sociológica bien diferente a la de las izquierdas marxistas, fueron también muchos los municipios en los que la fuerza de un renacido societarismo obrero y campesino permitió la entrada de concejales socialistas y comunistas; en aquellas comarcas donde el Partido Galleguista había apoyado las candidaturas del Frente Popular, también afiliados de significación nacionalista tuvieron ocasión de compartir la gestión del poder local. A medida que transcurren los meses, en zonas de intensa conflictividad sociopolítica, la convivencia en el seno de estas corporaciones tiende a enrarecerse. El alcalde de O Barco de Valdeorras, fusilado por los sublevados, aludía a la presión ejercida «[...] por aquellas masas que trataban de mediatizar mi actuación, y no prestándome yo a sus propósitos, empezaron a mirarme con recelo, tolerándome solamente a la fuerza»⁷; su vecino de A Veiga, como él presidente local de la agrupación de IR, hizo votar una resolución en la que los concejales de esta formación acordaron

enviar una protesta al comité provincial por la coacción que ejercen los obreros sobre los partidos republicanos, pues de seguir de esta forma, este

6. Vid. los casos contrapuestos de A Coruña y Ourense en GRANDÍO SEOANE, E.: *Caciquismo e eleccións na Galiza da II República*. Vigo: Promocións Culturais Galegas, S.A., 1999.

7. Archivo Territorial Militar de la Región Noroeste (ATMRN), causa 116/1936, fol. 15a.

Comité, se verá en la obligación de separarse del Bloque Popular, ya que no puede participar con Socialistas y Comunistas, toda vez que su política va en contra del Partido de Izquierda⁸.

Otra de esas consecuencias fue, como decimos, una nueva explosión del asociacionismo obrero y campesino por toda la geografía gallega. Los socialistas contaban con núcleos organizados en las principales ciudades gallegas, además de en villas como Monforte, uno de los focos pioneros vinculado a la presencia de trabajadores del ferrocarril. La militancia crece exponencialmente tras las elecciones de febrero a la par que aumenta la influencia de los sindicatos adheridos a la UGT, incluidas amplias zonas del interior⁹. Y también lo hacen las posturas más radicales frente al tradicional reformismo, así como las tendencias a favor de la conjunción obrera, que tiene en la unificación de las juventudes socialistas y comunistas uno de sus mejores exponentes. También CNT refuerza su implantación en numerosas villas costeras del Atlántico (Vilagarcía, Ribeira, Marín, Bueu, Cangas...), en Santiago, Tui, algunas localidades atravesadas por la vía del ferrocarril Ourense-Zamora y, sobre todo, A Coruña¹⁰.

Pero todavía más significativo es el notable incremento de la influencia del PCE, particularmente en las dos provincias del sur. Durante la primavera, el partido refuerza su organización interna, sus Juventudes, el Socorro Rojo Internacional, los Ateneos Obreros, las Organizaciones de Estudiantes contra la Guerra y el Fascio, da los primeros pasos en la creación de unas rudimentarias «milicias» y está presente en todos los conflictos laborales que estallan allí donde es una fuerza organizada. Pero todavía es más significativa su rápida expansión por el rural pontevedrés y ourensano. Es muy probable que fuese su diputado por Pontevedra, el dirigente andaluz Adriano Romero Cachinero, el encargado de llevar a la práctica una estrategia que proporcionaría indudables réditos políticos a su partido: consciente de que la tradición societaria campesina de ámbito parroquial preexistente no permitía la creación de comités, habría concebido la idea de organizar grandes federaciones desde la base para llegar a las de ámbito provincial, regional y, finalmente, fundar una gran «Federación Nacional Campesina» de alcance estatal. Propuso, además, un programa de indudable atractivo: rebaja de la contribución al Estado en un 50 por ciento, supresión del impuesto de consumos, lucha contra las actividades usurarias, abolición del Tratado con Uruguay que facilitaba la importación de carnes congeladas, abolición de los foros, creación de un Banco Agrario de ayuda a los campesinos y jornada de ocho horas para los asalariados del campo¹¹. En Ourense se vio eficazmente secundado por

8. Acta de la penúltima reunión de la Agrupación Municipal de IR de A Veiga procedente del libro de sesiones depositado en el puesto de la Guardia Civil de O Barco de Valdeorras tras la sublevación militar.

9. GONZÁLEZ PROBADOS, M.: *O socialismo na II República (1931-1936)*. Sada-A Coruña: Edición do Castro, 1992.

10. Vid. PEREIRA, D.: *A CNT na Galicia. 1922-1936*. Santiago de Compostela: Edicións Laiovento, 1994.

11. Vid. SANTIDRIÁN ARIAS, V. M.: *Historia do PCE en Galicia (1920-1968)*. Sada-A Coruña: Edición do Castro, 2002, p. 160.

el líder provincial del Partido, Benigno Álvarez González¹², de forma que, en vísperas de la sublevación militar, el número de sociedades captadas por ambas Federaciones Provinciales muy bien pudiese rondar las cuatrocientas.

La necesidad de estar en posesión de un carné sindical para encontrar trabajo en las obras públicas y las presiones a los propietarios agrícolas para que sólo se contratasen trabajadores afiliados también contribuyeron eficazmente a este renacimiento del societarismo de uno y otro color. Y son, asimismo, una de las claves para entender los grandes progresos que se producen en la imbricación de las luchas obreras urbanas y las reivindicaciones campesinas, también favorecidas por el carácter simbiótico de una parte del proletariado gallego que compagina el trabajo a jornal con el de la tierra. La proliferación de huelgas laborales durante la primavera y los paros en protesta por la violencia política fascista encuentran, en no pocas ocasiones, la solidaridad de los trabajadores del campo y provocan el pánico de los sectores conservadores, interesados en presentarlos como el preludio de una revolución anunciada. La ola de anticlericalismo que se extiende por algunos ayuntamientos, la ocupación de propiedades del clero y, sobre todo, la violencia política, contribuyen a radicalizar todavía más los ánimos.

Respecto a esta última conviene advertir que todavía nos faltan estudios que permitan medir sus niveles y su impacto real en las cuatro circunscripciones gallegas. Lo que conocemos para el caso ourensano —al menos seis asesinatos políticos, cinco de ellos de izquierdistas y uno falangista, entre los meses de mayo y julio y un rosario de enfrentamientos imposible de cuantificar— quizá no pueda extrapolarse mecánicamente al resto de Galicia por las peculiaridades que presenta esta provincia en cuanto a fuerte presencia del calvosotelismo, una Falange muy numerosa y ese destacado avance del societarismo al que aludíamos. En todo caso, sin negar la responsabilidad de la izquierda en mucha de esa violencia, dos cosas parecen evidentes. La primera, que buena parte de ella está alentada y financiada por la derecha sociológica, que abandona masivamente el posibilismo y apuesta por la vía de la confrontación; la radicalización de las Juventudes de Acción Popular (JAP), del carlismo —en los pocos lugares de Galicia donde es una fuerza organizada— y el crecimiento de Falange —a pesar de su ilegalización y de la clausura de sus centros— son algunas de sus manifestaciones. La segunda, que existe una estrategia de amplificación de esa misma violencia con evidentes fines políticos: no se trata únicamente de proporcionar «munición» a Calvo Sotelo o a Gil Robles para que den a conocer en el Parlamento los excesos de la izquierda que calla la censura y, en ocasiones, los propios informes de los gobernadores civiles; se trata de conseguir que una parte sustancial de las clases medias identificasen como principales responsables del

12. Vid. PRADA RODRÍGUEZ, J.: «y le dijimos que no podía trabajar sin asociarse». Societarismo y conflictividad campesina en el Ourense republicano», en CASTILLO, S. y FERNÁNDEZ, R. (coords.), *Campesinos, artesanos, trabajadores*. Lleida: Milenio, 2001, pp. 237-248; y «De la desconfianza al compromiso activo. La penetración del PCE en el tejido societario ourensano (1929-1936)», en *Actas del Iº Congreso sobre la historia del PCE 1920-1977*, edición en CD-ROM.

caos y la anarquía al conjunto de la izquierda en bloque y así lograr su apoyo, más o menos entusiasta, a la acción quirúrgica largo tiempo en marcha.

Pero antes de que ésta se concretase, los gallegos todavía habrían de ser convocados a las urnas en dos ocasiones más. La primera, en abril, con motivo de la nominación de compromisarios para la elección de presidente de la República; la segunda, en junio, para ratificar en plebiscito el Estatuto de Autonomía que permanecía durmiente desde el primer bienio. Las dos convocatorias electorales tuvieron en común una significativa «abstención» de la derecha. Confirmando lo ya señalado, preocupaba por entonces mucho más contribuir a la estrategia del «cuanto peor, mejor» y preparar la definitiva solución de fuerza que pudiese fin a la marea revolucionaria y, de paso, al reformismo republicano.

2. EL CAMINO HACIA EL GOLPE

No hizo falta esperar al triunfo de las izquierdas para que el «ruido de sables» se escuchara con fuerza en las guarniciones gallegas. En plena campaña electoral, los contactos entre la oficialidad al mando de distintos cuarteles en las cuatro provincias con representantes de Falange y la Comunión Tradicionalista anuncian claramente el camino a seguir: cuando menos en Ourense, ya estaba previsto que, tras declararse el estado de guerra, habría un reparto de armas entre sus «milicias», las cuales contribuirían al mantenimiento del orden y ayudarían a transmitir la imagen de que la acción del Ejército contaba con un amplio apoyo ciudadano. El 7 de febrero, el entonces jefe de la base naval de Ferrol, vicealmirante Calvar, promulgaba una orden de operaciones, complementada por una instrucción cinco días más tarde, en la que se disponían las medidas que habrían de tomarse para proteger con fuerzas de la Armada y el Ejército la ciudad y garantizar el funcionamiento de los servicios mínimos¹³; resulta difícil no ver en ellas un antecedente inmediato de lo que ocurriría poco más de cinco meses más tarde, del mismo modo que sucedió en A Coruña con el «Plan de Defensa de la Plaza», previsto desde meses antes y que se cumplió con casi total precisión el 20 de julio¹⁴.

Tras la victoria electoral del Frente Popular, cada guarnición del Ejército y cada Comandancia de la Guardia Civil se convierten en un hervidero de rumores y conspiraciones. La que más cerca estuvo de concretarse fue la que preveía una sublevación entre el 18 y el 19 de abril, significativamente también denominada «Movimiento», quizá porque sus objetivos eran esencialmente negativos: apartar del poder a los dirigentes frentepopulistas. Aparentemente, el núcleo conspirativo coruñés parecía una más de las iniciativas que se estaban llevando a cabo en

13. FERNÁNDEZ SANTANDER, C.: *La Guerra Civil en Galicia*. A Coruña: Ed. La Voz de Galicia, col. Biblioteca Gallega, 1988, p. 28.

14. GRANDÍO SEOANE, E.: «Golpe de Estado y represión franquista en la provincia de A Coruña: ¿Qué pasa con Coruña?», en JUANA, J. de y PRADA, J. (coords.): *Lo que han hecho en Galicia... Violencia política, represión y exilio*. Barcelona: Crítica, 2006, p.31.

diferentes Capitanías e incluso guarniciones de provincias, aunque quizás coincidiese en un momento determinado con los planes de la «junta de generales» de Madrid, donde Rodríguez del Barrio ya tenía elaboradas las líneas maestras de una operación sobre el Ministerio de la Guerra y la Capitanía de Madrid. La delación de uno de los implicados evitó que se hiciese realidad y, aunque algunos comprometidos fueron trasladados, la estructura conspirativa permaneció casi inalterable y no tardaría en reactivarse gracias a las idas y venidas de diversos enlaces¹⁵.

Hasta principios de mayo no se tiene constancia en A Coruña de que ahora es el general Mola quien dirige los preparativos del golpe. Aún habrán de pasar dos meses más para que los planes de la sublevación queden definitivamente ultimados a la espera de fijar una fecha definitiva. Los enlaces de aquél no consiguieron que el general jefe de la División, Enrique Salcedo Molinuevo, ni el comandante militar de la plaza, Rogelio Caridad Pita, se comprometiesen a secundar el golpe, aunque todo indica que el primero, de haber tenido una comunicación directa con Sanjurjo, lo hubiera hecho sin excesivas vacilaciones. Serán entonces los oficiales de inferior graduación quienes tomen la iniciativa, entre ellos el jefe de Estado Mayor de la División, el teniente coronel Luis Tovar Figueras, delegado regional de la UME y cabeza de la conspiración por la vigilancia gubernamental a que era sometido el coronel Pablo Martín Alonso¹⁶.

Desde principios de julio también se intensifican los contactos con dirigentes de las formaciones derechistas afines que permanecen en libertad. Panfletos y circulares haciendo votos por el pronunciamiento del Ejército y conteniendo instrucciones sobre concentración y preparación de tropas circulan con rapidez en ambos sentidos y a pesar de la intensa vigilancia gubernamental y la de las formaciones afines al Frente Popular. Esto nos introduce en una de las cuestiones en su momento más debatidas por la historiografía: el papel de los apoyos civiles. Según la «Instrucción Reservada nº 1» de Mola, el «movimiento» tendría una base doble: una militar, articulada desde las diferentes Divisiones Orgánicas, y una civil, que tomaría como marco organizativo cada provincia. En el momento de concretarse el golpe ambas instancias se fundirían en una sola, pero la base novena ya dejaba claro que los comités civiles sólo tendrían conocimiento de su organización particular. Estos últimos estarían integrados por formaciones políticas afines, hombres que se adhriesen a aquél a título individual y milicias contrarrevolucionarias. En todo caso, actuarían plenamente subordinados a la instancia militar y tendrían como misiones esenciales reforzar los cuerpos armados, ocuparse de la continuidad en el funcionamiento de los servicios públicos, suministrar personal auxiliar para las tareas gubernativas, participar en la gestión de los ayuntamientos y contribuir al mantenimiento del orden si era necesario su auxilio.

15. FERNÁNDEZ SANTANDER, C.: *Alzamiento y guerra civil en Galicia (1936-1939)*. Sada-A Coruña: Edicións do Castro, 2000, I, pp. 70-71.

16. COUCEIRO TOVAR, H.: *Hombres que decidieron (17 a 22 de julio de 1936)*. Madrid: Ed. Rollán, 1969, p. 742.

No cabe duda que había muchos derechistas que estaban al tanto de los movimientos en los cuarteles, que sabían que «algo» se estaba preparando, aunque desconociesen los pormenores de los preparativos. También que tenían instrucciones precisas de cómo actuar cuando se declarase el estado de guerra, aunque sólo fuese por los precedentes ya señalados, que no estaban dispuestos a permanecer impasibles ante el estado de cosas existente e, incluso, que algunos soñaban con insensatas acciones insurreccionales que proporcionasen el pretexto para una intervención del Ejército por la que hacía tiempo que suspiraban¹⁷. Pero ninguna fuerza política del espectro reaccionario disponía en Galicia de la fuerza suficiente para tomar la iniciativa; algo que, por lo demás, quizás sólo habría servido para que el Gobierno se decidiese a actuar con la energía que le faltó en los momentos culminantes de la conspiración.

Falange, por ejemplo, tenía su cadena de mando prácticamente deshecha como consecuencia de las órdenes de detención y de extrañamiento cursadas por los cuatro Gobiernos Civiles. Sin embargo, afiliados del SEU y de la Sección Femenina y algunos dirigentes menos conocidos intentaron no quedar aislados de la dirección nacional, mantener abiertos los canales de comunicación con las diferentes guarniciones provinciales y continuar proporcionando información sobre los elementos izquierdistas más caracterizados¹⁸ y contribuyendo a la estrategia del «cuanto peor, mejor», como también hicieron tradicionalistas y japistas. Poco antes de ser detenido el día 13 de julio, Fernando Primo de Rivera encargó a Hedilla que se trasladase a Galicia, intentase poner un poco de orden y preparase a sus efectivos para el inminente golpe. La sublevación le sorprendió en plena tarea, pero aún así tuvo tiempo de dictar algunas instrucciones, reestructurar sus cuadros y organizar una columna encargada de colaborar en el sometimiento de la resistencia en el sur de Pontevedra¹⁹. Los hombres de Calvo Sotelo y de la CEDA, por el contrario, estaban más preocupados por proporcionar los medios económicos necesarios para que el golpe se hiciese realidad y por intentar

17. De hecho, las Directivas para la VII División redactadas por Mola ya contemplaban la posibilidad de que en alguna provincia se produjese un levantamiento civil, supuesto en el cual, «las fuerzas del Ejército no desobedecerán la orden de marchar contra ellos sino que aprovecharán esta circunstancia para buscar su contacto y ponerse de su parte, pues hay que apoyar con toda decisión a los buenos españoles que se sublevan contra un estado de cosas que nos va a sumir en la ruina, la desolación y el descrédito» (vid. MAIZ, F. B.: *Mola, aquel hombre. Diario de la conspiración, 1936*. Barcelona: Planeta, 1976).

18. Cfr., por ejemplo, las tareas de vigilancia desarrolladas por los falangistas con relación al grado de penetración de la Masonería en Ferrol; según un informe remitido en marzo de 1936 a la Nacional, dichas tareas eran necesarias porque «Para nosotros [...] era evidente que en el momento en que empezara el movimiento los cuerpos o unidades que estuvieran controlados por gentes pertenecientes a sociedades secretas del tipo de la Masonería serían de muy dudosa eficacia para la causa nacional pues considerábamos lo más probable que obedecieran antes a las órdenes de las sociedades a que pertenecieran que a las que pudieran emanar de los jefes del movimiento nacional» [Archivo Histórico Nacional-Sección Guerra Civil (AHN-Secc. G.C.), Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo-1261].

19. ÁLVAREZ PUGA, E.: *Historia de la Falange*. Barcelona: Dopesa, Colecc. «Documento periodístico», 1969, pp. 127 y ss. y *Rumbo*, 19-III-1937, p. 4.

conservar su influencia en la nueva coyuntura política que necesariamente se abriría tras la intervención del Ejército.

En A Coruña, donde, lógicamente, se iba a decidir la actitud que seguirían las restantes guarniciones de Galicia, no se tarda en tener conocimiento de la sublevación en Marruecos. Sus fuerzas militares, incluida la Guardia Civil, estaban dispuestas a sublevarse desde la tarde-noche del día 18, pero la indecisión de Salcedo Molinuevo, que ese mismo día mantuvo contacto telefónico con Mola, retrasó los planes de los más impacientes. Menos dudas tienen los integrantes de las «milicias» contrarrevolucionarias, que desde esa jornada hacen sentir su presencia en los cuarteles de las principales ciudades para ponerse a las órdenes de los conjurados a la vez que para excitarlos a que no retrasen más de lo imprescindible su salida de ellos.

Y mientras tanto, ¿qué hacen las autoridades gubernativas? Su actitud es básicamente idéntica a la del resto de España: dudar entre armar a las masas y con ello provocar que las tropas salgan a la calle y dar alas a la revolución o permitir el triunfo del golpe si los mandos leales no logran contener a sus subordinados. Cuando intentan reaccionar autorizando algunos repartos de armas cortas es ya demasiado tarde e incluso son desobedecidos en algunos lugares, como sucede con la Policía y la Guardia Civil en Ourense. Mientras, en las principales poblaciones, las fuerzas izquierdistas improvisan desde el día 19 los autotitulados «Comités de Defensa de la República». En las capitales, sus integrantes permanecen al lado de los gobernadores civiles y en villas y aldeas lo hacen con los alcaldes; triunfante el golpe, serán los más buscados para exigirles las «más altas responsabilidades».

De zonas próximas a las ciudades más importantes llueven los ofrecimientos para organizar columnas de voluntarios que acudan a defender las instituciones republicanas; aunque algunas llegarán a hacer acto de presencia, la mayoría serán rechazadas argumentando que el Gobierno controla la situación y no se debe provocar a los militares. En toda la geografía gallega se someten a vigilancia cuarteles y comunicaciones, interceptan carreteras y dinamitan algunos puentes; se llevan a cabo requisas de armas en domicilios de conocidos derechistas y algunos son encarcelados, en ocasiones para evitar que apoyen la sublevación y en otras para evitar que sean linchados por las masas; la huelga general, el gran mito del proletariado que bastaría para conjurar cualquier amenaza golpista, se declara en los principales núcleos de población; miles de hombres, las famosas «guardias rojas», se concentran en lugares estratégicos mientras los derechistas toman buena nota de quienes vociferan más. En todas partes sobra entusiasmo y faltan armas y dirección²⁰.

20. Diversos aspectos de la toma del poder por parte de los sublevados en ciudades y villas de Galicia pueden verse en: AGRAFOXO PÉREZ, X.: *1936. A guerra civil en Lousame e Noia. Testemuñas dunha represión*. Noia: Ayuntamiento de Lousame, 1995; AMOEDO LÓPEZ, G. y GIL MOURE, R.: *Redondela, crónica dun tempo pasado. A II República e o primeiro franquismo*. Sada-A Coruña: Edición do Castro, 2002; GIRÁLDEZ LOMBA, A., «La guerra ha terminado... Hace sesenta años, en Vigo». Vigo: Instituto de Estudios Vigueuses, 1999; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, X. M. y VILLAVARDE ROMÁN, X. C.: *Moaña nos*

Menos dubitativos se muestran los conjurados, que no dudan en desplazar a los generales Salcedo y Caridad Pita en A Coruña y al contralmirante A. Azarola en Ferrol cuando se niegan a ponerse al frente de la rebelión; consumada su deposición, se trasmite a todas las guarniciones la tan esperada orden de declarar el estado de guerra. La resistencia organizada en aquellas dos ciudades es sofocada por las armas, mientras Santiago cae en manos rebeldes sin apenas oposición y el control de las villas y aldeas de la provincia coruñesa se convierte casi en un auténtico paseo militar. En la capital pontevedresa el Gobierno Civil se rinde sin excesivas dificultades, pero en Vigo la columna que sale a proclamar el estado de guerra debe disparar a quemarropa sobre la multitud concentrada en la Puerta del Sol que intentaba impedirlo; el barrio obrero de Lavadores y la villa fronteriza de Tui serán escenario, como otras localidades, de tan heroicos como vanos intentos de frenar a los sublevados. En las dos provincias interiores, Lugo y Ourense, las capitales sucumben sin que apenas se registren incidentes y aunque en lugares como Ribadeo, Viveiro o A Gudiña se intenta prolongar la resistencia, una semana después de que las tropas saliesen a la calle Galicia estaba por completo en manos rebeldes.

Comenzaba, entonces, el tiempo de la represión.

3. LA LÓGICA Y LA ILÓGICA DE LA REPRESIÓN EN GALICIA

Rastrear los orígenes de las distintas líneas de fractura que ayudan a comprender parte de los porqués a que aludíamos en la introducción es tarea ciertamente imposible en un trabajo de estas características. Hubo, sin duda, en toda Galicia muchos asesinatos que no podrían explicarse sin descender a otras tantas historias de vida entrecruzadas en las que las rivalidades personales se funden con las políticas sin que sea posible discernir cuáles fueron primero y cuáles después,

anos vermellos. Conflictividade social e política nun concello agrario e mariñeiro (1930-1937). Sada-A Coruña: Edicións do Castro, 1999; GONZÁLEZ PÉREZ, J. A.: *Nigrán, memoria de una guerra, 1936-1939*. Vigo: Edicións do Cumio, 1998; GRANDÍO SEOANE, E.: *Años de Guerra. A Coruña, 1936-1939*. Perillo-Oleiros: Vía Láctea, 2000; LAMELA GARCÍA, V. L.: *Inmolados Gallegos. Alejandro Bóveda, Víctor Casas, Telmo Bernárdez, Adrio Barreiro...* Sada- A Coruña: Edicións do Castro, 1993; *Crónica de una represión en la «Costa de la Muerte». Cee, Vimianzo, Ponte do Porto, Corcubión, Fisterra, Zas...* Sada-A Coruña: Edicións do Castro, 1995; *Estampas de injusticia. La guerra civil del 36 en A Coruña y los documentos originados en la represión*. Sada-A Coruña: Edicións do Castro, 1998; *A Coruña, 1936. Memoria convulsa de una represión*. Sada-A Coruña: Edicións do Castro, 2002; *1936. La «Cruzada» en Compostela*. Sada: Edicións do Castro, 2005; LIÑARES GIRAUT, X.A.: *Negreira na guerra do 36*. Sada-A Coruña: Edicións do Castro, 1993; PRADA RODRÍGUEZ, J.: *Ourense 1936-1939. Alzamento, Guerra e Represión*. A Coruña: Edicións do Castro, 2004; SANTOS ALFONSO, A.: *La sublevación militar de 1936 en Lugo*, Sada-A Coruña: Edicións do Castro, 1999; *La Guerra Civil en Lugo. Años 1937, 1938 y 1939*. Sada-A Coruña: Edicións do Castro, 2003; SOUTO BLANCO, M^a. J.: *La represión franquista en la provincia de Lugo*. Sada-A Coruña: Edicións do Castro, 1998; SUÁREZ MARTÍNEZ, X. M.: *O alzamento de 1936 no norte da Coruña*. Sada-A Coruña: Edicións do Castro, 1993; *Guerra civil e represión en Ferrol e comarca*. S.I.: Ayuntamiento de Ferrol, 2002; VELASCO SOUTO, C. F.: *1936. Represión e alzamento militar en Galicia*. Vigo: Promocións Culturais Galegas SA, 2006.

ni dónde finalizaban unas y comenzaban las otras. Aquellas familias enfrentadas durante décadas por un palmo de tierra que se disputaban el control de una parroquia o ayuntamiento y militaban en bandos políticos opuestos durante la Restauración; las mismas que en la dictadura de Primo de Rivera intentaron conservar su influencia introduciéndose en el tinglado upetista la una y apostando por el control de las sociedades agrarias del municipio la otra; ésas que, con la proclamación de la República, permanecieron en un caso fieles a la figura de Calvo Sotelo o se unieron a los radicales de Lerroux y más tarde a la CEDA y en otro lo hicieron a la izquierda republicana sólo porque sus competidores lo habían hecho al espectro contrario; aquéllas que, en fin, fueron sorprendidas por la sublevación militar en campos opuestos y mientras la primera y sus clientelas pudieron hallar acomodo con más o menos dificultades en la nueva coyuntura, la segunda vio como su antigua influencia se esfumaba cuando no hubo de llorar a alguno de sus vástagos y adláteres más queridos.

Antagonismos casi seculares, enemistades particulares, de parentela y aún de linaje, odios inextricables por herencias, pleitos, tierras, reparto de aguas, amóríos, rivalidades entre parroquias, deudas no cobradas o cantidades que se querían dejar de pagar, deseo de desquite por parte de personas que por las más diversas razones habían sido «sancionadas» comunitariamente por la mayoría de los vecinos... Todos ellos, confusamente revestidos de la denostada política que todo lo invadía, fueron la causa última de numerosos asesinatos. Porque aquél que, cargado como se creía de razón, no obtenía una sentencia favorable a sus intereses, era desposeído de una parte de su propiedad, se le privaba del acceso al líquido elemento las horas justas que reclamaba, no conquistaba a la muchacha de sus sueños, no se le reconocía un crédito, no recibía la colaboración de sus vecinos en la medida que estimaba justa o había de resignarse, año tras año, a que la fiesta de la parroquia vecina luciese el doble que la de la propia siempre veía tras ello la oscura mano del cacique enemigo: J. I. F. reclamó una renta que le adeudaba cierta familia de su misma parroquia y, con la relación ya envenenada, se vio implicado tiempo después en una riña tumultuaria con varios miembros de ella en la que perdió la vida; el principal acusado fue condenado a dos años, cuatro meses y 1 día de prisión por sentencia de la Audiencia Provincial, condena que, a juicio de uno de los hijos del finado, «camisa vieja» y posterior jefe local de la Falange de Vilamarín (Ourense), «fué (sic) tan corta por las influencias que P.D., pudo tener en la república (sic), ya que según consta en las declaraciones escritas que con este motivo se les tomó a los D., manifestaron estos ser las ideas políticas contrarias el móvil del crimen»²¹. Tales influencias no salieron a relucir en junio de 1936, momento en el que se produjo la muerte, sino que lo hicieron meses después de iniciada la sublevación cuando dos de los hermanos de aquél se dedicaron a extorsionar y a denunciar como izquierdistas a los vecinos implicados en aquellos hechos que, en 1952, todavía continuaban siendo alegados ante la jurisdicción de guerra.

21. ATMRN, causa 240/1945 y causa 68/1952.

Tampoco faltaron asesinatos imbuidos de un fuerte componente irracional, sin más razón que el azar o la fatalidad; lo que en otro lugar hemos denominado la «ilógica de la violencia», que se cobró la vida de personas de escasa o nula significación política y social que además permanecían ajenas a cualquier lucha de bandos²². Existió, bien es cierto, un confuso ámbito de no-previsibilidad en el que interactuaban todo tipo de intereses y móviles ajenos a la política con mayúsculas. Pero ello no debe hacernos perder la perspectiva sobre el carácter y la finalidad de la represión implementada en la retaguardia gallega. Y para responder a estas dos cuestiones nada mejor que determinar previamente a quién corresponde la responsabilidad última en su aplicación y quiénes fueron los sujetos activos y pasivos de la misma.

El fracaso del golpe y su degeneración en guerra civil fue lo que obligó a los sublevados a modificar sustancialmente sus previsiones iniciales. Asegurar la victoria a cualquier precio se convirtió entonces en el objetivo esencial, pero aquélla sólo sería posible si, en primer lugar, se ejercía un control absoluto de la retaguardia en todos los niveles. Y ese control sólo era factible si se garantizaba el mantenimiento y la subordinación de la estructura político-institucional existente y a la vez se hacía compatible con la ingente movilización de personas y recursos que, ahora sí, era preciso canalizar hacia el esfuerzo bélico. La dictadura de Primo de Rivera ofrecía, al inicio, el modelo a seguir. Como entonces, las Comandancias Militares y los puestos de la Guardia Civil fueron el elemento clave para garantizar una transmisión de poderes sin sobresaltos en los niveles del poder local y provincial. A través de las primeras se destituyó a las corporaciones no afectas y se realizaron los primeros nombramientos de gestores, caracterizados por una evidente provisionalidad dadas las «excepcionales circunstancias» a que conduce la resistencia de media España; en todo caso, ya el día 27 de julio, la División Orgánica dispuso con carácter general el cese de todos los ayuntamientos procedentes de la etapa republicana para fortalecer la autoridad de los sublevados en un ámbito tan trascendental. Gobiernos Civiles y Delegaciones de Orden Público pasaron también a manos de elementos militares, a veces, como ocurre en Ourense y Lugo, con una previa experiencia de gestión en la etapa del marqués de Estella.

Más complejo es lo que ocurre con las distintas secciones locales de las «milicias patrióticas» que se suman al golpe. Las dudas que había mostrado el Gobierno de Madrid a la hora de armar a los simpatizantes izquierdistas se desvanecen en el caso de los sublevados. Como apuntamos, ya antes de la declaración del estado de guerra se constata en las cuatro provincias la presencia en los cuarteles de elementos vinculados a las distintas fuerzas del espectro político reaccionario para recibir armas e instrucciones. Pero es a partir de la promulgación de éste cuando sus voluntarios son convenientemente equipados para colaborar, primero, en la desarticulación de los distintos núcleos de resistencia y, más tarde, en el mantenimiento del orden. A partir de entonces, también en el ámbito rural, se

22. PRADA RODRÍGUEZ, J.: *De la agitación republicana...*, *op. cit.*, p. 236.

multiplican por toda la geografía gallega las agrupaciones de Requetés, de las JAP y, sobre todo, de Falange. En muchos casos, más en unas provincias que en otras, la iniciativa de su fundación corresponde directamente a delegados militares y de la Guardia Civil y son elementos castrenses los que se encuentran a su frente: en Ourense y Pontevedra incluso el partido de José Antonio va a estar dirigido por militares, aunque en esta última provincia sólo transitoriamente. Pero en otros intervienen desde las antiguas direcciones provinciales a párrocos y notables locales, cuando no son elementos advenedizos sin más objetivo que el medro personal los que intentan hacerse un hueco en la nueva coyuntura enfundándose cualquier camisa acorde a las circunstancias. Es en este ámbito donde se produjeron, dependiendo de cada zona, más o menos actuaciones autónomas que escapaban directamente de la dirección militar de la represión, aunque no de su control.

Nada hay, pues, en Galicia parecido a un derrumbe o a un caos institucional que permitiese el afianzamiento permanente de ámbitos de decisión independientes de la nueva estructura de poder militar. Las Comandancias Militares, los Gobiernos Civiles, las Delegaciones de Orden Público, las Diputaciones, los Ayuntamientos, la Guardia Civil, la Policía —incluso los agentes locales han sido militarizados instantáneamente— y las Inspecciones Provinciales de Milicias están bajo su completa autoridad. ¿Cómo se concilia esto con la defensa de la tesis de una «represión incontrolada» o «espontánea» en la retaguardia gallega? También en ella se vive un «verano caliente» que tiñe de sangre cunetas, ríos, playas, montes y tapias de cementerios; también en ella actúan por doquier bandas de asesinos que ostentaban un poder omnímodo que nadie parecía saber de dónde procedía y a las que nadie exigía responsabilidades por sus actos criminales; también en ella la represión paralegal multiplica por tres, o más en algunas comarcas, a la normativizada. Pero sólo un porcentaje reducido de estas víctimas entraría dentro de lo que, en rigor, habría que calificar realmente de «represión no controlada», que no, insistimos, «incontrolable»; es decir, aquélla de la que las autoridades militares no fueron directamente responsables por acción o por delegación del poder de decidir sobre la vida y la muerte de un hombre.

El verano y la primera mitad del otoño concentran la gran mayoría de los asesinatos paralegales, aunque las particularidades locales matizan cualquier tentativa de establecer un marco cronológico cerrado. En realidad, aunque contados, no desaparecerán por completo durante el período bélico e incluso se prolongarán en el tiempo, asociados ya a las actividades relacionadas con la resistencia armada antifranquista. Por lo que se refiere a sus aspectos externos, Galicia no difiere en exceso de lo observado en otras regiones: en la inmensa mayoría de los casos, las víctimas son sacadas por la noche de un centro de reclusión, ya sea cárcel provincial, de partido, depósito municipal, barco-prisión o cualquier espacio habilitado como tal, tras la orden verbal o la entrega del preceptivo oficio firmado por la autoridad que tiene competencias sobre los detenidos en cuestión (comandantes militares, gobernadores civiles, delegados de Orden Público, mandos militares, responsables de la Guardia Civil, jefes de Policía, etc.) y asesinados

en cualquier punto de su geografía, sin distinción de límites administrativos; dicho oficio suele adoptar la forma de orden de traslado o libertad, sin que de los conservados pueda deducirse el empleo de una fórmula tan mecánica y precisa como la descrita, por ejemplo, para la Prisión militar de San Gregorio²³. Como característica más singular quizá haya que apuntar la escasa tendencia, en comparación con lo que sucede, por ejemplo, en tierras canarias, castellanas o andaluzas, a recurrir a grandes fosas comunes para enterrar los cadáveres. Se prefiere, en cambio, dejarlos durante horas, a veces días, a la intemperie, para que todos puedan verlos, casi siempre en pequeños grupos de tres, cinco, quizá siete personas; incluso no es infrecuente que en un mismo viaje varios hombres sean asesinados en un lugar determinado y el resto continúe trayecto decenas de kilómetros hasta las proximidades de otra remota aldea. Naturalmente hay excepciones, como ocurre en Ferrol, donde existen casos documentados de sacas de hasta veinticuatro presos asesinados en el mismo lugar y hora²⁴, pero la tendencia mayoritaria es la descrita.

Y lo es, probablemente, porque era la que mejor se conciliaba con el hábitat disperso de la geografía gallega y con la penetración —desde luego incompleta, pero en todo caso relevante y, sobre todo, que por lo rápida y reciente asustaba todavía más a los tradicionales dominadores de la vida política local— de las «ideas avanzadas» durante el período republicano. La contemplación de los cadáveres de unos desconocidos hasta en los lugares más alejados ejercía un efecto paralizante sobre los habitantes de las aldeas, los empujaba a la sumisión y ejercería de bálsamo frente a cualquier manifestación de disidencia. No se trata, como en ocasiones se ha dicho, de ocultar las huellas de los crímenes o de mantener el anonimato de sus ejecutores. Los asesinatos se perpetran en lugares alejados, pero no inaccesibles. Más bien ocurre lo contrario: curvas y cunetas de carreteras y caminos muy frecuentados que incluso se designan con nombres particulares que las identifican; puentes que salvan los ríos que después arrastran los cuerpos kilómetros y kilómetros cauce abajo para asegurarse que los vecinos de los pueblos ribereños que los contemplan o aquéllos que acuden a los recodos en los que recalán entiendan el mensaje; lugares estratégicamente situados que extienden el eco de los disparos en noches en las que nadie duerme por temor a ser objeto de la visita de alguna «patrulla del amanecer»; playas en las que las luces del alba descubren los cuerpos inermes ante quienes acuden a faenar...

Y en cuanto a los sicarios, basta con decir que nunca mostraron especial preocupación por ocultar sus fechorías; más bien las propagaban y aún multiplicaban para que el miedo cumpliera mejor su función. Su identificación, por cierto, no ofrece demasiadas dificultades, pues tanto las fuentes orales como las escritas documentan en las cuatro provincias su actuación. En primer lugar sobresalen los miembros de las diferentes milicias que se suman a la sublevación, especialmente falangistas, tanto «camisas viejas» como «de aluvión», pero también japistas, algún

23. URIEL, P.: *Mi guerra civil*. Ed. del autor, 1988, pp. 83-84.

24. Vid. SUÁREZ, X. M.: *Guerra civil...*, *op. cit.*, pp. 88 y ss.

tradicionalista e incluso miembros de guardias cívicas como *Los Caballeros de La Coruña*, a los que ya testimonios contemporáneos responsabilizaron de algunos de los asesinatos perpetrados en la ciudad herculina²⁵. Pero también aparecen implicados como ejecutores directos militares, guardias civiles, guardias de Asalto y Seguridad, algunos carabineros y policías, etc. que actuaban por orden directa de las autoridades militares. Todo ello sin ocultar, como ya se ha señalado, que en lo que hemos denominado «nivel de base» o «inferior» de la represión paralegal²⁶, que opera esencialmente en el ámbito local, se dieron numerosos casos de asesinatos sin intervención directa ni conocimiento por parte de aquéllas o de sus delegados.

Si la dirección militar de esta modalidad represiva no ofrece dudas, mucho menos lo hace la represión normativizada o juridificada. Durante las dos o tres primeras semanas que siguen a la declaración del Estado de guerra, como es lógico, la mayor parte de las víctimas procede de las operaciones militares destinadas a acabar con los distintos núcleos de resistencia y de las denominadas de «castigo y limpieza», destinadas a dispersar las grandes concentraciones de huidos que proliferaron por toda la geografía gallega tras la toma de los principales núcleos de población. Durante ellas fue relativamente frecuente que las columnas, formadas por militares, fuerzas de orden público y milicianos civiles, ejecutasen sin formalidad alguna a parte de los sorprendidos con armas en la mano.

Paralelamente, mientras tiene lugar la fase de apogeo de la represión paralegal, dan comienzo los primeros sumarísimos de urgencia, que lo mismo se cobran, dependiendo de las provincias, la vida de obreros y campesinos capturados durante dichas operaciones intentando hacerles frente que la de relevantes personajes de la vida política e incluso mandos militares que no habían secundado la sublevación. Como es lógico, los consejos de guerra se prolongan durante todo el período bélico y mucho después de éste dada la *vis atractiva* mostrada por la jurisdicción castrense. Con todo, 1937 es el año que concentra, en el conjunto del territorio gallego, la mayor parte de las sentencias de muerte y al año siguiente, a salvo de las lógicas excepciones y de quienes permanecían en rebeldía y son capturados o hacen su presentación, se da prácticamente por concluida la exigencia de «las más altas responsabilidades» por hechos acontecidos con anterioridad y en los días inmediatos al golpe; enseguida tomarán el relevo el enjuiciamiento de las conductas relacionadas con el auxilio a huidos y la resistencia armada antifranquista. Todo lo ya apuntado por los distintos especialistas en cuando a las nulas garantías y a las torturas para obtener testimonios inculpatorios

25. En un documento del Sindicato Nacional del Transporte Marítimo de CNT escrito por «un evadido del campo faccioso» se señalaba, en referencia a los ejecutados en A Coruña, «[...] que han sido inmolados por la barbarie fascista encuadrada en los falangistas y los *caballeros de la Coruña*, organización que se dedica a buscar a los ciudadanos y sus familias para saciar sus intentos (sic) criminales y probocar (sic) situaciones de violencia para justificar las matanzas de los pueblos y de la ciudad Herculina» (AHN-Secc. G.C., PS Bilbao, Carp. 259, exp. 21; subrayado en el original).

26. PRADA RODRÍGUEZ, J.: *Metodoloxía e fontes para o estudo da represión franquista en Galicia*. Ourense: Obradoiro de Historia de Galicia, 2003; y *De la agitación republicana...*, op. cit., pp. 184-187.

que caracterizaban a esta «justicia al revés» descrita por Serrano Suñer²⁷ son extensivas al caso de Galicia, por lo que no es necesario profundizar aquí en ellas.

Sí conviene, para finalizar este apartado, fijarnos en quiénes son las víctimas de las diferentes modalidades represivas con resultado de muerte. Lógicamente, su catálogo es muy amplio. En primer lugar, los militares que permanecieron fieles a la República, incluidos un buen número de miembros del cuerpo de Carabineros, y los principales dirigentes políticos, comenzando por los cuatro gobernadores civiles, diputados en Cortes y provinciales y los alcaldes de las principales ciudades y villas, naturalmente sólo los de significación izquierdista, ya fuese «burguesa» o «marxista», y los que pudieron ser capturados. En segundo lugar, los cabecillas políticos y sindicales de ámbito local, ya hubiesen disputado con mejor o peor fortuna el poder local a sus tradicionales dominadores o hubiesen sido los más destacados a la hora de organizar o encabezar huelgas, manifestaciones, boicots contra propietarios agrarios y contratistas de obras públicas, actos de naturaleza anticlerical, etc. En tercer lugar, intelectuales, maestros y, en general, personas de cierta relevancia cultural a los que, especialmente el clero, acusaban de ser los principales responsables del «envenenamiento de las masas». Desde luego, un buen número de marineros, jornaleros, trabajadores del ferrocarril y de la construcción, obreros de las manufacturas, algunos empleados comerciales, etc., la inmensa mayoría afiliados a las distintas centrales sindicales con implantación en Galicia.

Y a su lado, como hemos anticipado, algunos ejemplos de gentes sin ninguna significación política ni social que, a diferencia de los anteriores, tampoco se habían distinguido especialmente por su compromiso republicano, por haber tomado parte en los acontecimientos revolucionarios de octubre o por haberse implicado en la violencia política anterior al golpe, en paros o hechos irreverentes contra la Iglesia, etc.; aunque en conjunto suponen un porcentaje reducido del total de ejecuciones, son los principales damnificados por esa aparentemente «ilógica» de la represión a la que ya aludimos. Sólo aparente, porque la exhibición de sus cadáveres servía todavía más eficazmente a la difusión del terror perseguida por los sublevados que la de algún personaje de relevancia pública, ya que extendía hasta límites insospechados el ámbito de indeterminación de las víctimas.

Represión paralegal y normativizada son, pues, las dos caras de un mismo proceso represivo y no «dos represiones» diferentes; dos etapas de una misma secuencia depuradora por cuanto su dirección, objetivos y víctimas son esencialmente idénticos en toda Galicia.

4. LOS OBJETIVOS Y LAS CIFRAS DE LA REPRESIÓN EN GALICIA

Los marineros de Ferrol, los obreros de A Coruña o la multitud que se congregó en la Puerta del Sol de Vigo tuvieron rápida y cumplida ocasión de comprobar que

27. SERRANO SUÑER, R.: *Entre el silencio y la propaganda, la Historia como fue. Memorias*. Barcelona: Planeta, 1977, pp. 244-245 e 247-248.

los sublevados no se detendrían ante nada en el uso masivo de la fuerza para imponerse; otro tanto les ocurriría a los que, en fechas posteriores al 20 de julio, intentaron mantener una resistencia, tan heroica como suicida, en diferentes puntos de su geografía y a los propios compañeros de armas de los sublevados que se habían negado a secundarlos: nada menos que dos generales y un contralmirante no tardaron en rendir su vida ante un pelotón de fusilamiento demostrando lo poco que aquéllos se detenían ante rangos y jerarquías. Nada nuevo descubrimos si afirmamos que, también en Galicia, el uso de la violencia y el terror formaba parte de su estrategia de dominación desde la fase de la conspiración; las tantas veces citadas «Instrucciones» de Mola son por sí mismas lo suficientemente elocuentes y no necesitan mucho más comentario. Constatemos tan sólo que, como se ha descrito sucintamente páginas atrás, no puede aducirse como justificación de ambos, violencia y terror, la existencia de una situación de guerra civil ni tan siquiera la prolongación de una resistencia armada que pusiese en peligro las posiciones conquistadas.

¿Sucede lo mismo con su generalización y con su conversión en una acción quirúrgica de urgencia que trasciende las manifestaciones de rebeldía frente al nuevo poder? Lo que ocurre durante aproximadamente la primera semana después de declarado el estado de guerra parece matizarlo claramente. En Ourense, por ejemplo, la comisión gestora provincial estaba celebrando sesión en el mismo edificio que era a un tiempo sede del Gobierno Civil y de la Comandancia Militar y que va a ser tomado por los militares rebeldes sin que muevan un dedo para detener a los diputados provinciales; poco más tarde, dos de ellos serían asesinados y un tercero, representante del PCE, se convertiría en uno de los hombres más buscados de la provincia. El propio comandante militar y jefe rebelde pondrá a disposición del gobernador civil un vehículo y una escolta para que se traslade a su ciudad natal; menos de dos meses después será uno de los principales testigos de cargo en el proceso que lo condena a muerte²⁸. En Pontevedra, la máxima autoridad gubernativa es también puesta en libertad y lo mismo ocurre con otros dirigentes políticos y sindicales que habían intentado organizar la resistencia, entre ellos Alexandre Bóveda, una de las figuras más destacadas del nacionalismo, fusilado a mediados del mes de agosto. Lugo y A Coruña presentan un panorama no muy diferente, que explicaba muy bien un capitán de la Guardia Civil que aludía, como justificación de su escasa energía a la hora de proceder contra conocidos izquierdistas, a que

la desorientación en esos días y la carencia de instrucciones hizo que (sic) al declarar el Estado de Guerra, solo se tuviese en cuenta su efectividad para actuar cuando las disposiciones dictadas en el Bando fuesen infringidas, pero nunca que alcanzasen sus efectos a hechos pasados, sancionados o permitidos por las autoridades con conocimiento de causa [...]²⁹.

28. PRADA RODRÍGUEZ, J.: *Ourense 1936-1939. Alzamiento...*, op. cit., p. 62.

29. Vid. ATMRN, causa 1.387/1937.

No puede desconocerse, por tanto, que el fracaso de los rebeldes a la hora de hacerse con el poder de forma inmediata influyó decisivamente para que en su retaguardia se desatase una auténtica guerra de exterminio en la que el terror deja de ser un instrumento para imponerse y se convierte en un medio para liquidar cuanto suponga una amenaza, siquiera potencial, para la «nueva España» que se pretende forjar. Por eso, alcanza no sólo a quienes se habían distinguido en la resistencia al golpe sino también a activos dirigentes políticos o societarios, a quienes ya se habían visto implicados en los acontecimientos revolucionarios de octubre, habían estado presentes en actos de naturaleza anticlerical o se habían puesto al frente de huelgas y manifestaciones. Por eso, no se limita a sancionar conductas que supongan un atentado contra su particular «legalidad» sino que, como subrayaba dicho capitán, se extiende a hechos pasados perfectamente legales en el momento de concretarse. Por eso responde a las directrices emanadas desde las más altas instancias de poder de los sublevados, aunque su implementación práctica, con un amplio margen de discrecionalidad, corresponda a las autoridades militares provinciales y también en el ámbito local dependa, en su modulación, de la sensibilidad o el capricho de cualquier responsable de la Guardia Civil o delegado de Orden Público.

Por eso, en definitiva, castiga a zonas que, como Galicia, habían sucumbido sin grandes obstáculos pero en las que no se podía contar con el compromiso activo de la totalidad de su población; donde era preciso «estimular» al conjunto de sus habitantes para que suministrasen ingentes cantidades de hombres, víveres, dinero y suministros que asegurasen la victoria bélica; donde, como hemos visto en el primer apartado, el «virus marxista», en sus diversas manifestaciones, había prendido en amplios segmentos sociales de los que se desconfiaba en extremo y que podrían suponer un verdadero peligro en el caso de que hubiese una «vuelta atrás». Desde este punto de vista, el territorio gallego se convirtió en un gigantesco laboratorio —ciertamente no el único— en el que ensayar muchas de las «soluciones», no sólo desde el punto de vista represivo, que después se aplicarían en otras zonas a medida que iban siendo conquistadas.

El uso del terror como arma política. Esa es la principal conclusión que se puede extraer a la hora de buscar las razones que impulsan a los rebeldes a su generalización en la retaguardia gallega. Porque «político» es el objetivo de levantar un orden sobre las ruinas del existente, ya lo consideremos una restauración del amenazado por la experiencia republicana o uno nuevo resultante de la incorporación al anterior de elementos que la recién estrenada coyuntura obliga a tener en cuenta. Helí Rolando de Tella y Cantos, el laureado general, por entonces gobernador militar de Lugo, decía en una información instruida en el verano de 1940 para depurar la conducta del gobernador militar de Ourense tras ordenar el asesinato de un legionario que

[...] la dureza de que tanto se habla [...] fue absolutamente precisa en las circunstancias en que ejerció el mando el Coronel Soto, como ocurrió en otros lugares que se salvaron para España, en los primeros momentos y así el General

que informa hubo de proceder con igual o mayor dureza e inspirado por iguales móviles de amor a la Patria.

Traigamos de nuevo a colación la dispersión geográfica en la exhibición de los cadáveres que aludíamos al referirnos a la represión paralegal. ¿Qué otra puede ser la razón de recorrer a veces más de un centenar de kilómetros desde donde las víctimas son recogidas hasta el lugar en que son ejecutadas y de la exhibición de sus cadáveres en lugares seleccionados con todo cuidado? La utilidad política del terror sólo se propaga y prevalece si se lo publicita adecuadamente y, ciertamente, no había mejor medio para extenderlo, para paralizar cualquier manifestación de disidencia y generar las lealtades compulsivas que la edificación que ese nuevo orden requería.

Fijémonos, por último, en el catálogo de víctimas anteriormente señalado. No cabe duda que la represión franquista se cebó en Galicia en los sectores más dinámicos desde el punto de vista político y social, lo que pone de manifiesto su enorme utilidad para la desarticulación de las bases sociales de partidos, sindicatos y sociedades que habían apoyado a la República. Unas bases a las que se prefirió dinamitar en lugar de intentar atraer, tal vez porque, como señalaban buena parte de sus propios propagandistas, eran «irrecuperables» para la «nueva España». Ello fue determinante para que las tendencias inhibitorias colectivas y el rechazo del asociacionismo se enseñoreasen durante décadas del solar gallego, arraigando profundamente en las generaciones posteriores. La represión franquista hizo anidar en las conciencias de sus habitantes el recelo permanente hacia el vecino, el miedo a cuanto significase compromiso con causa alguna, el rechazo de toda forma de acción colectiva por miedo a las delaciones, la percepción de que sólo en un individualismo exacerbado era posible hallar refugio a la espera de que cambiasen los tiempos; incluso, en algunos casos, la negación, cuando no la renegación, de quienes habían marcado a la familia con un estigma indeleble por su militancia. Los comportamientos externos de las gentes se modificaron y la desconfianza pasó a presidir las relaciones entre vecinos y familiares: I. Ríos contaba como sus hijos «fueron otros después del golpe, se hicieron desconfiados, cosa que lamentaba, pero no podía corregir, pues era una forma de defensa»³⁰. La política, la denostada política en la que nunca se había confiado por completo, ya no fue más un medio para alcanzar mayores cotas de libertad y bienestar sino un pecado colectivo que debía ser expiado no sólo por quienes la habían practicado en primera persona sino por el conjunto mismo de la sociedad que cometiera el error de seguirlos y de creer en su mensaje.

Si a esto añadimos el amplio catálogo de profesiones y sectores sociales representados, creemos que más que de una represión específica «de clase» habría que hablar en Galicia de una represión «de estatus» en el sentido de que afectó principalmente a individuos que, siendo republicanos, izquierdistas o anticlericales, disfrutaban de ciertos niveles de poder, reconocimiento e influencia

30. Ríos, I.: *Testimonio de la Guerra Civil*. Sada-A Coruña: Edición do Castro, 1986, p. 105.

social; dichas posiciones de «autoridad» podían proceder de su situación en el seno de la administración local (jueces y secretarios municipales y judiciales, alcaldes, concejales...), del ejercicio de determinadas profesiones especialmente reconocidas (médicos, abogados, periodistas...), de la riqueza personal que se poseyese («grandes» y medianos propietarios, comerciantes, pequeños industriales...), de la capacidad para intervenir en el mercado y en las relaciones sociolaborales (dirigentes de sociedades agrarias y sindicatos) o, naturalmente, de la influencia ideológica y cultural sobre las masas (maestros, intelectuales, dirigentes políticos provinciales, retornados indianos que poseían y aportaran importantes activos inmateriales relacionados con la tradición organizativa y de lucha). Exactamente aquéllos que suponían una mayor amenaza para el particular proyecto de dominación política y social de los sublevados, no para el control militar de la retaguardia, ya garantizado una semana después del golpe.

¿Pero, cuántas fueron las víctimas de la represión franquista en Galicia? «Contar» el número de muertos de uno y otro bando ha sido durante años una preocupación esencial de la historiografía, empeñada en dar respuesta a la cuestión de quién mató más. Más recientemente se vincula con el loable esfuerzo desarrollado por particulares y asociaciones para rescatar y reivindicar públicamente a las víctimas menos significadas, durante décadas silenciadas fuera del ámbito familiar o incluso en su interior. Existe, no cabe duda, una significativa demanda social, ya sea autónoma o inducida, relacionada con la recuperación de la que se ha dado en llamar, quizá impropriamente, «memoria histórica». Conocer «todos» los nombres se ha transformado en una exigencia ética más que académica, pero no cabe duda que las iniciativas llevadas a cabo desde los más diversos ámbitos contribuirán eficazmente a establecer, por fin, cifras muy aproximadas que sitúen en su justo término un debate inevitablemente contaminado por cuestiones de tipo ideológico.

En el caso de Galicia esta cuestión presenta algunos matices que la dotan de una complejidad añadida más allá de llegar a un consenso sobre qué debe entenderse por «víctima». Incluso si nos ceñimos a la «represión física con resultado de muerte», objeto principal de estas reflexiones, las cosas no se clarifican en exceso si pensamos en quienes fallecen producto de enfermedades, de malos tratos o de insuficiencia alimentaria en las prisiones, en los que se suicidan por miedo a la represión, en quienes pierden la vida tratando de huir o de esconderse de sus persecutores o en aquellos que son asesinados por cuestiones en las que para nada interviene la política pero sus ejecutores quedan impunes por ostentar cualquier camisa o uniforme. La cuestión no resulta baladí. Benigno Álvarez, el ya citado líder del PCE en Ourense, consigue permanecer oculto durante meses desplazándose de un lugar a otro, durmiendo muchas veces a la intemperie, lo que le ocasiona una grave enfermedad pulmonar; mientras, ve como tres de sus hermanos son asesinados y su madre y su hijo recién nacido fallecen víctima de las penalidades que hubieron de soportar aquélla y su compañera; finalmente, sintiéndose morir, sale de su último escondite para no comprometer a sus colaboradores y expira a un Km. escaso de su Maceda natal a mediados de abril de

1937³¹. En rigor, aunque un falangista disparó un par de tiros a su cadáver para intentar cobrar la recompensa ofrecida por cierta marquesa de la capital, no murió víctima de un acto de violencia directamente imputable a los sublevados o a sus apoyos; sin embargo, no sería nada fácil justificar su exclusión de uno de esos listados.

Pensemos además en el papel que juega Galicia en la estrategia del terror de los sublevados y en la tradición migratoria de sus habitantes. Comenzando por esta última, hay que señalar que son cientos los gallegos que en julio de 1936 se ven sorprendidos por el golpe militar en territorio que permaneció fiel a la República: jornaleros que trabajan en el campo andaluz, extremeño o castellano, ambulantes de los más variados oficios y profesiones, emigrantes más o menos asentados en Madrid o cualesquiera otra capitales... No pocos son los que se integran en las unidades apresuradamente organizadas para frenar a los insurrectos, algunas con combatientes de procedencia mayoritariamente gallega como el *Batallón Gallego* de las Milicias Populares, en el que figuraba inicialmente como comisario el diputado galleguista Ramón Suárez Picallo, o el *Batallón Galicia*, formado en su mayor parte por hombres que consiguieron llegar a Asturias tras la sublevación³². Y otros tantos son los que desertan de las unidades rebeldes en que fueron encuadrados a la fuerza, pasan a campo leal y después son juzgados por los tribunales de guerra de la División en que fueron capturados; algunos, movilizados en Galicia a la fuerza, son ejecutados en pleno frente de guerra por sus mandos e incluso por derechistas compañeros de batallón por sus actitudes, sus manifestaciones o, simplemente, por su pasado. Debido a esto, muchos gallegos víctimas de la represión reposan en diversas zonas del territorio español.

Y a la inversa. Especialmente tras la caída del frente asturiano, Galicia fue convertida en una gigantesca prisión donde fueron recluidos miles de prisioneros procedentes de otras regiones, especialmente asturianos y leoneses. Varios cientos fueron ejecutados en diversas localidades tras haber sido condenados a la pena capital en multitudinarios consejos de guerra y otros perdieron su vida en campos y prisiones que salpicaban toda su geografía. ¿El hecho de haber sido fusilado o asesinado en Galicia, aunque sea por «azar geográfico», convierte a la víctima en «gallego» o al gallego ejecutado fuera de aquélla en «madrileño» o «asturiano»? ¿Es, acaso, más correcto contabilizar como tales únicamente a quienes acreditaron un anterior compromiso político o social en su tierra de origen y actuación con independencia del lugar en que accidentalmente pudieron haber sido represaliados y registrar el resto en este último? De ser así, ¿cómo se «mide» o «acredita» dicho compromiso?

31. Vid. las imprecisiones sobre su muerte que publican los diarios *La Región*, 14-III-1937 y *Rumbo*, 14 y 16-III-1937.

32. Sobre esta cuestión vid. ÁLVAREZ, S.: *Las milicias populares gallegas. Un símbolo de la Galicia antifranquista. Ensayo histórico*. Sada-A Coruña: Edición do Castro, 1989; del mismo autor, «As milicias galegas. Unhas milicias autónomas», en VV.AA., *O 36 na Galiza*. Vigo: Promocións Culturais Galegas S.A., 1987², pp. 46-50.

Añadamos a esto el tiempo transcurrido, la problemática que presentan las fuentes orales —a veces las únicas que pueden dar testimonio de una víctima— y el *modus operandi* de la mayoría de las ejecuciones antes descrito y comprenderemos las dificultades que existen para dar una cifra siquiera aproximada de muertos. Sólo las provincias de Lugo y Ourense y varias comarcas coruñesas y pontevedresas cuentan con estudios exhaustivos y relativamente fiables en este espinoso capítulo. Por todo ello, criterios metodológicos y conceptuales incluidos, el abanico de referencia ha de ser necesariamente amplio y nos situaría en cifras que se moverían, probablemente, entre las 4.500 y las 7.000 víctimas. De ellas, documentadas a día de hoy y siempre de mínimos, 626 y 648 corresponderían a las dos provincias del interior, mientras que sólo en la comarca ferrolana el número de los ejecutados con nombres y apellidos pasa de los 750.

Lo esencial, en términos historiográficos, no así éticos o morales, es que ni por una ni por otra cantidad el franquismo fue más o menos asesino en Galicia. Constatar que las víctimas del golpe del lado de los sublevados son puramente simbólicas, que en sus fronteras no hubo batallas, que se hallaba muy alejada de los frentes y que sus ciudades no sufrieron bombardeos que pudiesen explicar actos de represalia contra la población simpatizante de las izquierdas implica colegir que, hubiesen sido mil o diez mil las víctimas, sólo puede hablarse de una salvaje represión desatada, como subrayamos, con una finalidad eminentemente política: que la sangre derramada ahogase cualquier manifestación de disidencia, cualquier posible brote de contestación al intento de restauración del orden amenazado por la experiencia republicana.